

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En estos autos Ingreso Corte 4326-2023, compareció el Fisco de Chile- Ministerio de Obras Públicas-Dirección General de Concesiones y dedujo recurso de queja en contra de Luz María Jordán Astaburuaga y Francisco Fontaine Salamanca, integrantes de la Comisión Conciliadora y Arbitral del Contrato de Concesión de Obra Pública Fiscal denominado “Embalse Convento Viejo, II Etapa”, que en su calidad de jueces árbitros arbitradores [conforme al Decreto con Fuerza de Ley 956 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en su versión anterior a la dictación de la ley 20.410] dictaron el 13 de marzo de 2023 con falta o abuso grave, sentencia definitiva de única instancia, en causa Rol 3-2023, que rechazó autorizar al quejoso la imposición de multas a la Concesionaria por el incumplimiento en la que esta incurrió.

I.- Antecedentes de la causa:

i.- Mediante Decreto Supremo MOP N° 273 de 27 de abril de 2005, el Ministerio de Obras Públicas (en adelante MOP) adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Embalse Convento Viejo Etapa II, VI Región” al grupo licitante “Consorcio Belfi Belsaco Brotec”, que constituyó por partes iguales la Concesionaria, conformada por las empresas constructoras Belfi S.A., Besalco Concesiones S.A. y Brotec S.A., las que por su experiencia es un contratante sofisticado y experto en la gestión y construcción de esta clase de concesiones.

ii.- Conforme al artículo 1° de la Ley de Concesiones, en su versión anterior a la ley 20.410 del año 2010; los artículos 1° y 2° de su Reglamento y el artículo 1.2.1 de las Bases de Licitación, el contrato está conformado, principalmente, por el decreto de adjudicación, las Bases de Licitación, la Ley de Concesiones y su Reglamento. En este contexto, las bases establecen en su artículo 1.8.15 la obligación de la Concesionaria de entregar al Inspector Fiscal una o más pólizas de seguro por responsabilidad civil a favor del MOP y del Concesionario, las que deberán estar vigentes durante todo el contrato: primero durante la construcción y luego, durante la explotación. El inciso 3° de dicha disposición obliga a la Concesionaria a entregar la respectiva póliza con una anticipación de a lo menos 60 días anterior al vencimiento de la póliza actualmente vigente y las mismas bases (artículo 1.8.6.1.) establecen



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CNGCXMYLXWP

una multa de 60 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada día de atraso por la no entrega de las indicadas pólizas (o su renovación).

iii.- El 5 de enero de 2023, el MOP solicitó a la Comisión que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 N° 1 de la Ley de Concesiones, emitiera un pronunciamiento favorable, autorizando imponer a la Concesionaria veinticinco multas de 60 UTM cada una, por el retraso en 25 días en cumplir su obligación de entregar la renovación de la póliza de seguro de catástrofe, atendido que la póliza de seguro N° 6443238 remitida por la Concesionaria, vencía el 19 de mayo de 2021, por lo que la entrega de la nueva póliza, o la acreditación de su renovación, debía realizarse 60 días antes, es decir, a más tardar el 20 de marzo de 2021, no obstante dicha obligación sólo fue cumplida el 15 de abril de ese año.

II.- Sentencia:

La Comisión desestimó autorizar la imposición de multas a la Concesionaria, previstas en el artículo 30 N° 1 de la Ley de Concesiones en su versión anterior a la ley 20.410, argumentando que debía realizar un análisis de fondo sobre el mérito del incumplimiento contractual que motiva las multas, pero sin un procedimiento de lato conocimiento ni recibir la causa a prueba, desechando la jurisprudencia que ha establecido, de forma reiterada, que la intervención de la Comisión en las solicitudes que tienen por objeto la imposición de multas iguales o superiores a 500 UTM, se limita a un análisis de admisibilidad formal, ya que sólo después de imponer las multas, la Concesionaria podrá impugnarlas en un juicio de lato conocimiento, donde ambas partes tendrán la oportunidad de rendir prueba.

Asimismo, los jueces recurridos señalaron que las disposiciones de las Bases de Licitación estatuyen que el retraso en la acreditación de la renovación de la póliza de seguro no se encuentra incluido en el literal e-8 cuadro N° 4 del artículo 1.8.6.1, lo que impediría conferir a dicha norma, relativa a las sanciones, un alcance diferente a su tenor literal ni aplicarla de un modo distinto del contemplado en ella.

III.- Faltas o abusos graves:

a) Infracción del artículo 30 N° 1 de la Ley de Concesiones en su versión anterior a la ley 20.410, en atención a que la referida normativa contempla dos procedimientos diferentes, uno de ellos, de lato conocimiento regulado en el artículo 36, en virtud del cual las concesionarias impugnan las multas contractuales que el MOP les aplique cuando incumplan el contrato; y el otro,



especial y abreviado, previsto en el artículo 30 N° 1, en que la Comisión realiza un análisis formal o de admisibilidad para autorizar al MOP a imponer multas superiores a UTM 500, sin que pueda a través de este procedimiento entrar a un análisis de fondo, conforme lo habilita el citado artículo 36.

En consecuencia, la decisión de los jueces recurridos desconoce la diferencia entre ambos procedimientos, mezclándolos.

b) Infracción del artículo 1545 del Código Civil en relación con los artículos 1.8.15, 1.8.17 y 1.8.6.1 de las Bases, en virtud de un doble razonamiento:

- Los recurridos consideraron que se está en presencia de sanciones penales, en circunstancia que la jurisprudencia judicial y administrativa, ha establecido sistemáticamente que las multas previstas en los contratos administrativos no son sanciones, ya que de ser así la Comisión Conciliadora y Arbitral no tendría competencia para conocer de la controversia, al estar en presencia de una materia de arbitraje prohibido (penal) o una materia de carácter extracontractual.

- Asimismo, concluyeron que la acreditación de la renovación de la póliza de seguro y su entrega, serían situaciones diferentes, en circunstancias que en este contrato de concesión deben ser entendidos como sinónimos. Así, el contrato de concesión se perfeccionó el 4 de julio de 2005, época en que las normas vigentes que regulaban el contrato de seguro establecían que era un contrato solemne que se perfeccionaba con la emisión de la póliza de seguro, como lo disponía el antiguo artículo 514 del Código de Comercio [*“El documento justificativo del seguro se llama póliza”*]. Entonces, a la época en que se perfeccionó el contrato de concesión, la única forma de acreditar la renovación de la póliza de seguro era entregándola la misma; por esa razón, en las Bases de Licitación debe entenderse que estos términos son usados como sinónimos, de manera que cuando el literal e-8 del cuadro N° 4 contenido en el artículo 1.8.6.1 de las bases dispone que la no entrega de la póliza de seguro en los plazos previstos en los artículos 1.8.15 y 1.8.17 de las mismas está sujeto a multas, debe concluirse que el incumplimiento sujeto a multas, comprende el incumplimiento de la obligación de acreditar oportunamente la renovación de la póliza de seguro, establecida en los artículos citados, ya que de lo contrario la disposición contractual carecería de toda utilidad.



Concluye solicitando que se acoja el presente recurso y, en consecuencia, se corrijan las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de la sentencia, estableciendo que se autoriza al MOP a imponer a la Concesionaria 25 multas de 60 Unidades Tributarias Mensuales cada una, que en conjunto ascienden a un total de 1.500 UTM.

Evacuando el informe requerido, los jueces árbitros Luz María Jordán Astaburuaga y Francisco Fontaine Salamanca, integrantes de la Comisión Conciliadora y Arbitral del Contrato de Concesión de Obra Pública Fiscal denominado “Embalse Convento Viejo, II Etapa”, señalaron que no han incurrido en las faltas o abusos graves que se les atribuye, según se puede leer de las motivaciones 3°, 4° y 5° de la sentencia, atendido que al ejercer la potestad jurisdiccional que la ley les ha asignado respecto del requerimiento del MOP, la Comisión no se limitó a practicar un mero examen formal de admisibilidad, sino que conforme el principio básico del debido proceso, dio traslado a la recurrente y, ejerciendo plenamente su jurisdicción, dictó una sentencia motivada.

En efecto, la intervención de la Comisión que contempla el artículo 87 N° 1 del Reglamento de la Ley de Concesiones, conforme a su sentido natural y obvio, debe entenderse referido a una intervención para resolver; interpretación que resulta en armonía con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Concesiones, que dispone que la Comisión habrá de pronunciarse respecto de la imposición de multas; tanto es así que el MOP ha interpuesto un recurso de queja en contra de los árbitros por la dictación de la sentencia, amparándose en lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, esto es, por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la ley les ha asignado para pronunciarse sobre el requerimiento del quejoso. De esta manera, la Comisión no se limitó a practicar un mero examen formal de admisibilidad, como se pretende, sino que, respetando el principio básico del debido proceso que instaura la Constitución Política de la República de Chile en el artículo 19 N° 3, dio traslado y ejerciendo plenamente su jurisdicción, dictó una sentencia fundada, sin que su actuar pueda considerarse una falta o abuso grave. Además, no existe argumento de texto que avale la interpretación restrictiva que postula el recurrente, pues la jurisprudencia en la materia es insuficiente para determinar el sentido y alcance de tales decisiones y no resultan vinculantes para la Comisión.



En un segundo orden de ideas, no resulta razonable estimar, como lo hace el MOP, que ha existido una falta y abuso, porque “a contrario sensu”, en los casos donde la Comisión autorice a imponer multas, la Concesionaria no podría impugnarlas con posterioridad en un juicio de lato conocimiento, en atención a que la finalidad exclusiva del recurso que queja es corregir las faltas o abusos graves cometidos por los jueces en la dictación de resoluciones jurisdiccionales y hacer efectiva su responsabilidad disciplinaria con ocasión del caso concreto sometido a su conocimiento, y lo que el recurrente pretende es corregir el abuso que a su juicio resultaría de hacerse extensivo a la Concesionaria en el futuro y en otras resoluciones jurisdiccionales la aplicación “a contrario sensu” de lo decidido en la resolución que motiva este recurso. Por ello, estas graves faltas y abusos no se encuentran en la decisión objetada sino en las eventuales consecuencias que ella pudiere producir en el futuro de aplicarse un razonamiento similar, pero esta vez a la contraparte del MOP.

A continuación, indican que en ninguno de los considerandos de la sentencia se incluye algún pronunciamiento sobre la naturaleza de las multas o sanciones que el MOP pretendía aplicar, toda vez que la decisión de desestimar la petición del quejoso se funda en la improcedencia manifiesta de imponer una multa contractual a una hipótesis no contemplada por las partes en el contrato.

Finalmente, en cuanto a la alegación del MOP relativa a considerar que la acreditación de la renovación de la póliza de seguro y la entrega de la misma en este contrato de concesión, deben ser “entendidos como sinónimos”, no encuentra respaldo en ninguna de las cláusulas del contrato, puesto que, según concluyeron, las estipulaciones relativas a multas o sanciones, cualquiera sea su naturaleza, deben ser interpretadas en forma restrictiva.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º.- Que el artículo 82 de la Constitución Política de la República prescribe que tratándose del ejercicio de la función disciplinaria, los tribunales superiores de justicia sólo pueden invalidar resoluciones jurisdiccionales “*en los casos y en la forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva*”. Esa ley, el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, establece que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CNGCXMYLXWP

faltas o abusos graves, cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional.

2°.- Que, en consecuencia, el recurso de queja constituye una forma de ejercicio de la función disciplinaria, que procede única y exclusivamente para sancionar la comisión de faltas o abusos de carácter grave, expresión esta última que denota además la excepcionalidad del medio de impugnación, puesto que el objetivo del recurso extraordinario de queja, al decir del legislador, es “*corregir las faltas o abusos graves*” cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, de tal manera que para su procedencia debe exigirse, como requisito *sine qua non*, la efectiva existencia de una falta o abuso cuya gravedad amerite su corrección.

3°.- Que conforme se deriva del recurso de queja, son dos los asuntos que levanta el quejoso para cimentar sus alegaciones: El primero apunta a una extralimitación de los jueces árbitros, quienes habrían emitido un pronunciamiento fuera de la hipótesis legal aplicable a la especie y, el segundo, cuestiona la calificación que los recurridos hicieron respecto de las sanciones materia de la pretensión del MOP, por una parte y, por la otra, releva el yerro en la interpretación de la normativa contractual que habilitaba aplicar la sanción.

4°.- Que debe recordarse que el pronunciamiento que motiva el recurso de queja fue dictado en el procedimiento incoado por el MOP conforme lo regula el artículo 30 N° 1 del D.F.L. N° 956 y 87 del D.S. 956, a través del cual solicitó imponer a la Sociedad Embalse Convento Viejo S.A. (la “concesionaria”), 25 multas de 60 Unidades Tributarias Mensuales cada una, que en conjunto ascienden a un total de 1.500 UTM, por el retraso en 25 días en el cumplimiento de su obligación de entregar la póliza de seguro por catástrofe renovada. Para ello, argumentó en resumen, que el artículo 1.8.17 de las Bases de Licitación establece la obligación de la concesionaria de entregar al Inspector Fiscal una o más pólizas por catástrofe; cobertura que debe mantenerse de forma ininterrumpida durante la vigencia del contrato, lo que requiere de la renovación de las mismas; a ello se suma que el inciso 3° del mencionado artículo 1.8.17 dispone que la nueva póliza deberá entregarse con una anticipación de a lo menos 60 días a la fecha de vencimiento de la póliza actualmente vigente, lo que no ha ocurrido en la especie, de manera que cabe aplicar las multas que estatuye el Cuadro N° 4 letra e) contenido en el artículo 1.8.6.1. Además, relevó el carácter



contractual de las multas que pretende aplicar, a lo que suma que el procedimiento especial regulado en los artículos primeramente aludidos, contempla exclusivamente un control de admisibilidad formal, lo que conlleva que una vez que la Comisión realice este control formal y otorgue la autorización solicitada, el MOP estará en condiciones de cursarlas y, cuando dicha imposición de las multas se notifique a la concesionaria, esta podrá impugnarla por razones de fondo recurriendo a la Comisión Conciliadora, en el procedimiento ordinario contemplado en el artículo 36 de la Ley de Concesiones y 86 del Reglamento.

Por su parte la concesionaria en el traslado respectivo, argumentó la inexistencia del incumplimiento que se le achaca, según se desprende de los tres primeros párrafos del artículo 1.8.17, que establecen dos pólizas de catástrofe que debe constituir, señalando el plazo en que deben entregarse: (a) Póliza por Catástrofe: debe estar vigente durante la Etapa de Construcción y debe ser entregada *“A lo menos quince días antes del inicio de la construcción de la obra...”* y; (b) Póliza por Catástrofe: que cubre la responsabilidad civil durante la Etapa de Explotación, la que debe ser entregada *“Con una anticipación de a lo menos 60 días a la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, ... debiendo acreditarse su renovación a lo menos 60 días antes de la expiración de las anteriores. ...”*. En consecuencia, la obligación de la concesionaria para la etapa de explotación es: (i) entregar la póliza con una anticipación de al menos 60 días antes de la Puesta en Servicio Provisoria de la Obra, y (ii) acreditar su renovación 60 días antes de la expiración de la póliza anterior, siendo esta última la obligación que debía cumplir en esta etapa, consistente en *“acreditar”* la renovación de la póliza. Luego, si la obligación era la entrega de la póliza renovada con al menos 60 días de anticipación al vencimiento de la anterior, debió consignarse en las respectivas bases.

5°.- Que los recurridos para desestimar la petición del quejoso, en los considerandos 3°, 4° y 5° del fallo sostuvieron, en el primero de ellos, que el artículo 87 N° 1 del Reglamento *“no contiene ninguna calificación ni restricción a su “intervención” ni dispone que ésta deba limitarse a un examen formal de los antecedentes”*, para seguidamente descartar la alegación del MOP respecto a una actuación de parte de la Comisión de índole formal en solicitudes como la de la especie, puesto que *“no hay un argumento de texto que avale dicha interpretación restrictiva, los antecedentes acompañados*



relativos a dicha jurisprudencia son insuficientes para determinar el sentido y alcance de tales decisiones y, desde luego, no resultan vinculantes para esta Comisión, por lo que esta habrá de concluir que, conforme a su sentido natural, el alcance de la intervención que se solicita conlleva pronunciarse derechamente sobre la procedencia de la aplicación de la multa cuya imposición se solicita” (considerando 4°); para finalmente concluir en el fundamento 5° “de la lectura del artículo 1.8.15 y del literal e-8 del cuadro N° 4 contenido en el artículo 1.8.6.1 de las BALI, queda claro que el retraso en la acreditación de la renovación de la póliza de seguro de catástrofe (...) no está incluida en el literal e-8 cuadro N° 4 contenido en el último de los artículos citados de las BALI, no pudiendo esta Comisión darle a dicha norma, relativa a las sanciones, un alcance diferente a su tenor literal ni aplicarla de un modo distinto del contemplado en ella”.

6°.- Que emprendiendo el examen propuesto, cabe consignar que el artículo 87 N° 1 del Reglamento establece: la “Intervención de la Comisión a Solicitud del Ministerio de Obras Públicas. 1.- El MOP deberá solicitar la intervención de la Comisión Conciliadora en los casos siguientes: a) Cuando proceda la aplicación de una multa igual o superior a 500 unidades tributarias mensuales...”.

Por su lado, el artículo 30 N° 1 de la Ley de Concesiones vigente a la época de la celebración del contrato, estatuye “En conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, la Dirección correspondiente, previo pronunciamiento favorable de la Comisión Conciliadora a que se refiere el artículo 36°, estará facultada para: 1.- Imponer al concesionario las multas que las bases administrativas establezcan, cuando éstas fueren iguales o superiores a 500 unidades tributarias mensuales...”

Finalmente, el artículo 36 de la misma regulación expresa “Las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la interpretación o aplicación del contrato de concesión o a que dé lugar su ejecución, se elevarán al conocimiento de una Comisión Conciliadora que estará integrada por un profesional universitario designado por el Ministro de Obras Públicas, un profesional universitario designado por el concesionario y un profesional universitario nombrado de común acuerdo por las partes, quien la presidirá. A falta de acuerdo, este último será designado por el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago.



Los integrantes de la Comisión deberán ser designados al inicio de la respectiva concesión, sin perjuicio de que puedan ser reemplazados cuando ello sea necesario o se estime conveniente. La Comisión deberá determinar sus normas y procedimientos debiendo contemplar, en todo caso, la audiencia de las partes y los mecanismos para recibir las pruebas y antecedentes que éstas aporten y deberá establecer, en cuanto se designen sus integrantes, el modo en que se le formularán las solicitudes o reclamaciones y el mecanismo de notificación que ella empleará para poner en conocimiento de las partes las resoluciones o decisiones que adopte”

“... Planteada la reclamación ante la Comisión, y a solicitud del reclamante, ella podrá decretar la suspensión de los efectos de la resolución del Ministerio a la que dicha reclamación se refiera.

Solicitada la intervención de la Comisión, ella buscará la conciliación entre las partes. Si ésta no se produce en el plazo de 30 días, el concesionario podrá solicitar a la Comisión, en el plazo de 5 días, que se constituya en Comisión Arbitral, o recurrir, en el mismo plazo, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En el primer caso, la Comisión actuará de acuerdo a las normas fijadas para los árbitros arbitradores y tendrá el plazo de 30 días para fallar, plazo durante el cual se mantendrá la suspensión de los efectos de la resolución o decisión del Ministerio. El fallo de la Comisión, en este caso, no será susceptible de recurso alguno.

En el evento de que el concesionario interponga el recurso ante la Corte de Apelaciones, éste se tramitará conforme al procedimiento establecido en los artículos 69 a 71 de la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional de Banco Central de Chile, y a las siguientes disposiciones...”

7°.- Que de las normas transcritas es dable concluir que el artículo 30 N° 1 de la Ley de Concesiones, que tiene su correlato en el artículo 87 N° 1 del Reglamento, habilita a la Comisión sólo para “*pronunciarse*” (artículo 30 N° 1) acerca de la solicitud de aplicación de multas en los términos planteados por el MOP, de forma tal que la petición que formule esta entidad entregue a la Comisión competencias exclusivas para resolver solo aspectos formales sobre la admisibilidad para la aplicación de multas [si son iguales o superan el límite de 500 UTM y si las bases contemplen su aplicación] más no para calibrar mediante la interpretación del contrato, el carácter del incumplimiento, pues ello supone la existencia de un contradictorio, que no se encuentra previsto para esa etapa procesal, puesto que la propia normativa contempló



la etapa de discusión y prueba para una instancia diversa y posterior, promovida por la propia sociedad concesionaria, a quien la legislación le resguarda su derecho a reclamar sobre las multas impuestas.

Ello no puede ser de otro modo, si se considera que es la propia legislación sectorial la que separa los momentos de intervención y competencia de la Comisión, reservando el análisis de mérito y verdadero contradictorio -juicio de fondo- en los términos que regula el artículo 36 antes precitado.

La dinámica opera entonces, con una intervención formal (como la que debió realizarse en autos) y luego, a petición del concernido, en un pronunciamiento de mérito que discierna sobre la procedencia de las multas impuesta. No existe otro modo de entender las disposiciones citadas. De otro modo, exigir una decisión de fondo en este estadio, implicaría que posteriormente en el juicio, la misma Comisión debería pronunciarse sobre una controversia producida con motivo de la interpretación o aplicación del contrato de concesión o de su ejecución, que ya resolvió en su intervención conforme al artículo 30 N° 1, no obstante que esta norma en concordancia con el artículo 36, imponen un examen ex post sobre la juridicidad de la multa.

9°.- Que, consecuentemente, este análisis primigenio de índole formal y que habilita la imposición de multas, será sin perjuicio de la decisión de fondo que la misma Comisión deberá adoptar sobre la concurrencia de los requisitos legales para su aplicación, con el debido resguardo de las garantías del debido proceso. Esta forma de concebir este tipo de procedimiento condice, además, con la naturaleza del contrato materia del presente recurso y los intereses involucrados en el mismo.

10°.- Que como corolario de lo que se ha razonado, la argumentación del fallo que en primer lugar destierra el examen formal que por ley estaba obligado a realizar, para luego adentrarse en un análisis de fondo del contrato, mediante una interpretación que lo llevó a concluir que la multa por el retraso en la acreditación de la póliza de seguro de catástrofe no estaba contemplada en las bases, haciendo además, una disquisición jurídica sobre la naturaleza de las multas para los efectos de su aplicación, y más allá de lo que eventualmente pueda decidirse en el procedimiento regulado en el artículo 36, da cuenta que los recurridos de queja emitieron un pronunciamiento apartándose de la normativa que regía su actuar, pues la



correcta aplicación de aquella que debían considerar debió llevarlos a acoger la petición del MOP y, si bien no se desconoce que el juez árbitro arbitrador dicta la sentencia conforme a las reglas de la prudencia y equidad, en la especie al desatender el procedimiento aplicable, conforme al estadio procesal expresamente regulado por el legislador, han incurrido en una falta o abuso grave que debe ser enmendada por esta Corte, conforme se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 545, 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se acoge** sin costas el recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado representada por Ruth Israel abogada Procuradora Fiscal, en representación a su vez, del Ministerio de Obras Públicas, en contra de los jueces árbitros arbitradores Luz María Jordán Astuburuaga y Francisco Fontaine Salamanca, de la Comisión Conciliadora y Arbitral del Contrato de Concesión de Obra Pública Fiscal denominado “Embalse Convento Viejo, II Etapa”, y en consecuencia se deja sin efecto la sentencia de trece de marzo de dos mil veintitrés recaída en los autos Rol 3-2023, y en su lugar se decide que se acoge la aplicación de veinticinco multas de 60 UTM cada una, por los 25 días de atraso, solicitadas por el Ministerio de Obras Públicas.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al Pleno de esta Corte por estimar no existir mérito para ello.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra Lilian Leyton Varela.

Rol N° 4326-2023

Pronunciada por la **Octava Sala** de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada, además, por el ministro señor Hernán Crisosto Greisse y la ministra señora Lilian Leyton Varela.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CNGCXYLXWP



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CNGCXMYLXWP

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Hernan Alejandro Crisosto G., Lilian A. Leyton V. Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CNGCXMYLXWP